

El colapso argentino parece no tener fin

Las culpas de Isabel

(II y último)

por Daniel SAN SEBASTIAN

La República Argentina está viviendo, no cabe duda, un período particularmente dramático y vergonzoso de su historia. Período que se caracteriza por multitud de asesinatos, represión, quiebre de las más elementales libertades, corrupción y bancarrota económica.

El principio lo marcó el desgobierno de Isabel Perón. La viuda del líder de los trabajadores estuvo, al menos formalmente, al frente del ejecutivo, desde el 1º de julio de 1974 hasta el 24 de marzo de 1976, fecha en que fue derrocada por un golpe de Estado militar. Si hubiese que resumir en una sola palabra su breve período de gobierno, esa palabra sería "muerte". Su gestión tuvo como marco permanente y siniestro la muerte y las heridas de más de 2 mil personas que fueron víctimas inocentes de no menos de 5 mil acciones violentas perpetradas en la más perfecta impunidad. En apenas 20 meses de desgobierno, bandas armadas para-militares y para-policíacas protagonizaron unos 250 actos de violencia mensuales la mayoría de las cuales consistieron en el secuestro de personas cuyo cadáver, casi invariablemente aparecía al día siguiente acribillado a balazos.

El gobierno de Isabel Perón fue en cierto modo la antesala de la masacre, que, a partir del 24 de marzo de 1976, los militares sistematizarían según las reglas de una concepción más científica de la guerra: campos de concentración, exterminios masivos, torturas sofisticadas.

Ya un mes antes de la muerte de Perón, la violencia estatal se había institucionalizado en tal forma que los grupos para-policíacos y la siniestramente célebre acción anticomunista argentina (AAA), se había adueñado de la calle y actuaba con total impunidad. En junio de 1974 fueron detenidos más de un centenar de exiliados uruguayos mientras otros mil ochocientos recibían la "orden" de abandonar el país. No pocos proscritos fueron devueltos clandestinamente a la otra orilla y puestos en manos de las autoridades militares y otros, sencillamente, aparecieron asesinados en las afueras de la capital. Aproximadamente 200 chilenos que huyeron del régimen de Pinochet habían buscado refugio de este lado de la cordillera fueron obligados a regresar a su país, violando así el gobierno argentino los más elementales principios del asilo internacional.

En septiembre de ese mismo año la represión desencadenada desde la Casa Rosada alcanza a los propios peronistas que han manifestado su oposición al régimen corrupto y represivo de Isabel Perón. Julio Troler, ex funcionario del gobierno cae acribillado a balazos. Atilio López, ex vice gobernador de la provincia de Córdoba luego del triunfo peronista de 1973, es secuestrado y asesinado junto con otro ex funcionario público. No pocos miembros de la juventud peronista aparecen ultimados a tiros junto a los caminos.

En esa misma época son asaltados los sindicatos

obreros, las universidades y los locales políticos. Las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del interior se transforman en escenario de un sinnúmero de crímenes políticos; bandas de sujetos armados, actuando impunemente, asesinan sin más trámite a todo individuo sospechoso de ser opositor.

Al mismo tiempo, el caos se adueña de la economía del país, el mercado negro se convierte en el negocio más productivo y la especulación y el desfalco financiero pasan a la categoría de bussines legales. Desde enero de 1974 (cuando aún no ha muerto Perón) hasta agosto del año siguiente se producen 2 mil 675 huelgas obreras, lo que representa un promedio récord de 134 huelgas mensuales (más de cuatro diarias). Movilizaciones, represión y caos, son los tres elementos que caracterizan este período.

Los militares, por su parte, aguardaban que "la situación madurara" a fin de mejor justificar su intervención. Suponían que a mayor desorden del régimen peronista mejor oportunidad habría de asimilar la población a la masacre que ellos estaban preparando.

Finalmente, en marzo del 76, considerando que las condiciones están dadas, deciden actuar, no pueden esperar más: el gobierno de Isabel Perón, ante la anarquía que reina en el país, ha resuelto adelantar para fin de año el llamado a elecciones. Esta decisión precipita una decisión perfectamente calculada, que enrarecía el aire político desde hacía meses.

La presidenta es detenida pero su asesor privado y hombre de confianza, José López Vega, se salva de la cárcel gracias a un providencial viaje anticipado a Europa. A partir de ese instante se inaugura una nueva etapa histórica que dura hasta nuestros días. Isabel Perón, juzgada por diversas malversaciones de fondos, permanecerá detenida desde entonces.

Que Isabel haya recuperado su libertad es un acto de justicia. Lo es, sencillamente, porque la junta militar argentina no tiene el derecho de juzgar ni a ella ni a nadie. Durante esa dictadura, el pueblo ha sufrido tanto o más que antes. Pero ello no quiere decir que la viuda de Perón no lleve sobre sus hombros una carga muy difícil de olvidar: la muerte de decenas de personas, el secuestro, la bancarrota económica, la represión generalizada.

No sólo cabe reprocharle la represión, el ensañamiento, el atropello de que fueron víctimas tantos argentinos como exiliados extranjeros. Su responsabilidad personal y la de su equipo gobernante en el descalabro económico de la Nación es indudable. Los cinco ilegales años de reclusión cumplidos por ella, no alcanzan, no alcanzarán jamás a redimirla de los crímenes cometidos durante su efímero reinado. Las lágrimas que pudieron verterse sobre su suerte, no menos que la alegría por su liberación, están totalmente fuera de lugar.